

Jorge Giraldo Ramírez

Universidad EAFIT

LECCIÓN EMÉRITA. CÁTEDRA LUIS OSPINA VÁSQUEZ

31 de mayo de 2022

NUESTRA DIFICULTAD  
PARA VIVIR JUNTOS

Giraldo Ramírez, Jorge, 1957-

Nuestra dificultad para vivir juntos / Jorge Giraldo Ramírez – Medellín: Editorial EAFIT, 2022

24 p.; 21 cm.; il. -- (Cátedra Luis Ospina Vásquez)

1. Paz – Colombia. 2. Conflicto armado – Colombia. 3. Colombia – Política y gobierno – Historia. 4. Intervención del Estado. 5. Giraldo Ramírez, Jorge, 1957 – Pensamiento político y social. I. Tít. II. Serie

303.66 cd 23 ed.

G516

Universidad EAFIT – Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas

## Nuestra dificultad para vivir juntos

Primera edición: agosto de 2022

© Jorge Giraldo Ramírez

© Editorial EAFIT

Carrera 49 No. 7 sur - 50

Tel.: 261 95 23, Medellín

<http://www.eafit.edu.co/editorial>

Portal de libros: <https://editorial.eafit.edu.co/index.php/editorial/index>

Correo electrónico: [fonedit@eafit.edu.co](mailto:fonedit@eafit.edu.co)

Coordinación editorial: Claudia Ivonne Giraldo G.

Diseño: Alina Giraldo Yepes

Imagen de carátula: 2143372171, 1714823062 ©shutterstock.com

Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158 emitida el 13 de febrero de 2018.

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial.

## Nuestra dificultad para vivir juntos

Hace ocho años visité las obras de uno de los proyectos de infraestructura más grande jamás construidos en el país. Desde las estribaciones del Nudo de Paramillo pude ver abajo la desviación del Cauca –el río con el que hemos tenido las más largas conversaciones– y me maravillé de la soberbia de un paisaje intervenido. Luego bajé a los túneles situados en la margen opuesta, en las profundidades de la cordillera central; mi ignorancia en asuntos de ingeniería hizo que me sorprendiera ante el umbral de lo que se llama la caverna de transformadores. Arriba la luz, abajo la oscuridad; y, se me ocurre, una serie de opuestos: la complacencia y la incomodidad; la ligereza y la densidad, la seguridad y la esperanza.

No pretendo hacer un ejercicio de bisutería deconstructivista; solo aprovecho una anécdota personal para hacer explícito mi lugar de enunciación puesto que aquella caverna tiene, además de las platónicas, otras evocaciones como el viejo topo marxiano (con equis) y las simas (con ese) berlinianas y una referencia más directa a la cultura *underground* y su oposición sistemática al *mainstream*. Excusen las expresiones inglesas que no se pueden traducir sin más al español sin atentar contra la economía de lenguaje ni subestimar el bagaje de la audiencia.

Ese viaje fue a mediados de 2014, un año más bien optimista: se habían disipado los efectos más graves de la crisis económica mundial producida seis años antes; el terrorismo parecía haberse normalizado, incluso en Europa; los gobiernos occidentales seguían presumiendo de un estado de paz mundial, a pesar de la anexión violenta de Crimea por parte de Rusia; en Colombia se nos daban a conocer los primeros acuerdos entre el Gobierno nacional y las Farc, y el país mostraba sus mejores indicadores sociales de la historia y los proyectos viales más importantes en al menos medio siglo; Antioquia y Medellín parecían haber consolidado un proceso de recuperación que hacía recordar los mejores días de un tiempo pretérito.

No cabe duda de que el presente es diferente. El contraste parece innecesario: una pandemia anunciada está causando estragos hace tres años, las democracias mostraron sus dientes autoritarios para gestionarla, los más débiles y vulnerables padecieron con mayor rigor las calamidades (nada nuevo bajo el sol) y Occidente está sorprendido de que un Estado cristiano esté tratando de exterminar a otro (no hubo tanta conmoción cuando los cristianos mataban musulmanes en Bosnia o Chechenia). En Colombia, tanto el Acuerdo de Paz como la paz misma fueron hechos trizas por el Gobierno nacional con el aplauso de la mitad de la población; y en Antioquia están temblando los cimientos sociales, políticos y económicos del acuerdo implícito que regía nuestra forma de gobernarnos, nuestra convivencia y nuestra orientación regionales.

Aunque las múltiples fracturas que afectan la realidad que estábamos constituyendo desde 1989 están siendo, paulatinamente, mejor descritas, es muy prematuro adoptar una caracterización. Si hubiera que pronunciarse al respecto me inclinaría por la que usó Hamlet ante el fantasma de su padre: “El tiempo

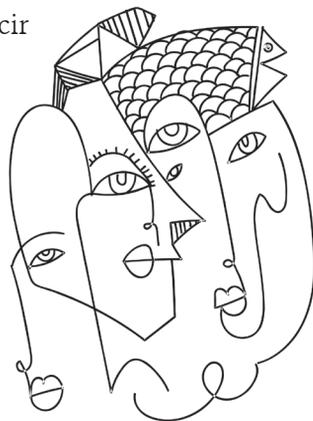
está descoyuntado”. Como he insinuado, son desajustes locales, insertos en desajustes regionales, enclavados, a su vez, en un mundo desajustado.

Ahora bien, mis deberes están circunscritos aunque no son sencillos. Porque –uso las palabras de un escritor levantino– soy

como un vigilante nocturno en un jardín al día siguiente de una tormenta y cuando ya se está anunciando otra más fuerte... No hay nada en ese jardín que sea propiedad personal suya. Pero ahí es donde vive con las personas a las que quiere y todo cuanto pueda afectar a esa comarca le toca de muy cerca.

Antioquia es mi jardín y así declaro mi objeto de atención pues aunque el departamento está más imbricado que nunca con la nación, sigue teniendo marcas peculiares. De modo que me ocuparé enseguida de articular en voz alta mi pensamiento con unas reflexiones sobre el descoyuntamiento regional, cuyas evidencias eclosionaron en los dos años recientes.

Comienzo retornando sobre los rasgos de la modernización regional que atrajeron –y lo siguen haciendo– a tantos estudiosos de tantas partes que le hicieron decir a alguien que éramos el caso más estudiado del continente. Corro el riesgo de fatigar a los entendidos porque el mito se concentra en los titanes de la industria y la gerencia y subestima o desecha los demás pilares del proceso antioqueño. Al menos, es la impresión que deja el debate reciente al calor de las polémicas sobre Hidroituango y el cerco tendido a la propiedad de las principales sociedades anónimas de origen local.



En el principio de la modernización fue el Estado. Luis Ospina Vásquez ya había indicado la importancia decisiva del papel económico activo del Estado colombiano en cuanto interventor, protector y director, potestades sobre las que se abstuvo de emitir un juicio valorativo distinto a que fueron un factor crucial para el proceso de industrialización. Además, con la precariedad imaginable, el Estado organizó las vías de comunicación y la educación, entre otras infraestructuras necesarias para la creación de riqueza. Esos industriales pioneros, al menos los antioqueños, salieron de una matriz primordial –la Escuela Nacional de Minas– que era un constructo estatal.

En referencia a las administraciones de Núñez y Reyes, Ospina afirma que el diseño de esa política económica no estaba fundado sobre ningún propósito principalmente económico. ¿Cuál era, entonces, ese propósito? Despolitizar la sociedad, diversificar la vida social, ampliar los repertorios conversacionales; en suma y en boca del protagonista de entonces José María Rivas Groot, citado a pie de página: “La cuestión primordial es esta: la paz”. Pero desde mucho antes, la élite antioqueña, en sus múltiples rostros, procuró mantenerse alejada de los ímpetus bélicos que se desbocaban a cada tanto en el país y lo logró en la peor de todas las guerras, la de Los Mil Días.

Al Estado y la paz –una tautología cuando hablamos en términos de teoría política doméstica– se agregaron otros dos elementos. El primero lo constituyen los avances educativos. Según la información que recogió la historiadora Patricia Londoño, en distintos momentos del primer tercio del siglo XX Antioquia concentró un tercio de las asociaciones académicas y culturales del país y una cuarta parte de las bibliotecas públicas, era el departamento con el mayor porcentaje de personas matriculadas en instituciones educativas y su alfabetización superaba en

un 30% el promedio nacional. Gran parte de este esfuerzo provino de las comunidades religiosas católicas y de las familias.

El segundo, cómo no, es la configuración de un *modo de vida* peculiar regido por unas pocas normas, muchas de las cuales fueron fomentadas expresamente por los sectores dirigentes. Una constante entre los autores que elaboraron los estudios regionales, que ya son nuestros clásicos, es la referencia a la ética o al *ethos* como elemento central de la trayectoria antioqueña desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo pasado. Sin afán de correcciones, solo por hacer hincapié en que no se trata solo de prédicas, preferencias expresadas o discursos edificantes, prefiero usar la categoría *modo de vida*, que puede definirse como el conjunto de “rutinas institucionalizadas que estructuran nuestra vida diaria y que implican hábitos, conductas, un conjunto de normas aceptadas por las personas de forma prerracional”, es decir, reglas impersonales, casi siempre tácitas, con suficiente legitimidad como para ser observadas.

El sentido del deber, el trabajo como el único medio legítimo de sustento y enriquecimiento, el mayor respeto relativo de los derechos de propiedad, la eficacia de la norma social –así presu-  
mamos de que dependía del miedo a la autoridad o al infierno–, una religiosidad vinculante y expresiva, la austeridad, la centralidad de la familia, la apertura en el trato personal, la ayuda mutua y la caridad como mecanismo operativo del principio de subsidiariedad son algunas de las características identificadas por sociólogos e historiadores.

Ese *modo de vida* fue encarnado por un segmento que articulaba las élites empresariales, religiosas y políticas. Un número considerable de familias, formadas en las mismas instituciones y círculos sociales, integraba la red desde la que se marcaba la pauta comportamental a partir del sermón, el ejemplo y el reglamento,

en un movimiento extendido hacia los sectores medios y bajos. Su gran logro fue moldear y darle estabilidad a una forma de vivir juntos que prevaleció durante más de medio siglo.

La orientación del proceso regional estuvo regida por la doctrina social católica, ideales comunitarios paternalistas y la adscripción al ideario conservador tradicionalista, pragmático y moderado que no cedió, sino que contribuyó a marcar el punto de ruptura con las tendencias radicales de estirpe falangista que hicieron carrera durante esos años. Era improbable que una sociedad de este tipo estuviera abierta al escrutinio crítico que se despertaba en su seno en virtud de su propio empuje educativo y modernizador, y que fuera permeable a adaptaciones provenientes del exterior de la tradición. Poco espacio tenían los núcleos de rebeldía que buscaban por distintas vías una sociabilidad distinta, anclada en el ideal ilustrado, y sus expresiones en la universidad pública y los sindicatos, el arte y la literatura fueron objeto de un acallamiento severo. El brillo y el destino de estas minorías contestatarias se ven reflejados en la carrera de personajes como María Cano, Fernando González y Gerardo Molina, tan importantes para vidas como la mía y tan marginales respecto al cuerpo hegemónico de Antioquia.



Si los grupos rectores de ese *modo de vida* frustraban sus medios endógenos de renovación y por ese camino aseguraban su propio agotamiento, fueron la guerra y la dictadura las que se encargaron de truncarlo a mitad del siglo pasado. Una breve interpretación de la pérdida espiritual que se produjo con esas calamidades puede encontrarse en un discurso de Alberto Lleras Camargo, en el que me detendré. Lleras está hablando ante la

principal asociación de economistas, un año largo después de que se diera por terminada la contienda armada entre liberales y conservadores, y lleva ejerciendo pocos meses como el primer presidente surgido de elecciones abiertas en doce años, lo que quiere decir que está parado en el zaguán que debería llevar al país a la paz y a la democracia. Pero en un momento tal, en el que cualquier muestra de exultación sería adecuada y otros hablarían como demagogos o entrenadores motivacionales, Lleras se muestra preocupado e inquisitivo. Su argumentación denota la certeza de que la paz negativa y la democracia procedimental son las premisas básicas para poder estar unos al lado de otros, pero que vivir juntos necesita condiciones adicionales, más arduas y complejas.

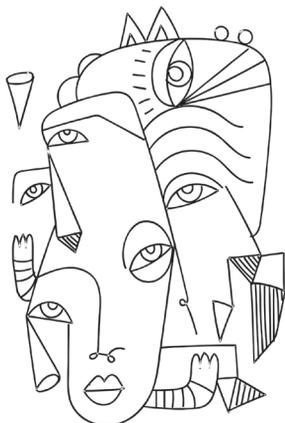
¿A qué llamo pérdida espiritual? Bajo este nombre de sabor medieval pongo algunos rasgos que Lleras detectó en ese temprano 1959: la inexistencia de un propósito o una vocación nacionales y la consiguiente sensación de que somos una nación “que marcha al azar”, la advertencia de que nos metimos en una “burocratización prematura” y la constatación de que se está presentando un “cambio radical de valores”. Me detengo en este último punto. A diferencia de los diagnósticos que se estilieron dos décadas después y que recalcarían, casi con nostalgia, la pérdida de los valores o un vacío ético, Lleras es consciente de que se está presentando un cambio distinto al deseable en lo que acá llamo *el modo de vida*. Un cambio hacia una sociedad en “la que solo vale el interés económico” y obtienen primacía la novedad hipnótica de los artefactos tecnológicos y el afán de acrecentar la riqueza nacional a costa del esfuerzo que debe dedicarse a cultivar el sustrato sobre el que puede asentarse un país civilizado, con una personalidad definida.

El primer presidente del Frente Nacional, al igual que los estadistas conservadores de principios del siglo XX, descreía de que promover o incrementar la producción, propiciar la actividad económica o hacerla más eficiente pudieran ser el eje de un propósito colectivo.

Todo esto que Lleras veía con perspicacia para Colombia es aplicable a Antioquia.

Cierto es que en los años sesenta se logró atemperar el clima político y normalizar el funcionamiento de las entidades públicas; también, que mejoraron los indicadores económicos y sociales del departamento. Pero desde la perspectiva del cambio cultural que estoy proponiendo, fue un periodo en el que vivimos una situación de inercia definida como la prolongada inestabilidad de las estructuras normativas de la sociedad y del sentido compartido de sus integrantes, que son las fuerzas sobre las que descansa cualquier forma de vivir juntos. Para comprender este hecho son más útiles las historias que las estadísticas. Historias sobre la erosión de la familia tradicional, como las que descubrió la arquidiócesis de Medellín en un estudio de 1961; sobre la migración y la creación de asentamientos informales en las laderas de la capital, propiciados por un nuevo tipo de intermediarios

sociales y políticos; sobre las tomas de tierras en algunas subregiones y las protestas estudiantiles; sobre el surgimiento del crimen organizado cuyo primer asomo fue, quizás, el secuestro de Diego Echavarría; sobre la conmoción social que produjo la construcción de la represa de El Peñol; sobre la transformación del contrabando, un delito tolerado y casi folklórico; sobre el término “tomas hostiles” y su papel en la inflexión profunda en la conducta de una franja



del empresariado antioqueño; sobre los pasillos que llevaron a Pablo Escobar a la riqueza, primero, y, después, al Congreso de república. Cada frase de este listado puede ser el tema de crónicas y novelas –algunas ya lo fueron– sobre los acontecimientos que marcaron el desmoronamiento de la sociabilidad antioqueña entre 1961 y 1982.

La trama de esas historias es la desintegración del centro funcional que definía las reglas del comportamiento social bajo fuerzas centrífugas de diverso tipo y origen que disociaron a los poderes económicos, políticos e ideológicos de la región. A mediados de los años setenta, estos poderes no solo estaban desalineados entre sí, sino que las principales instituciones que los representaban –Iglesia, empresas y partidos– estaban fracturadas en sus propios ámbitos de autoridad, propiedad o influencia. El panorama de los sectores subalternos era más caótico aún. El reguero de siglas que competían por la vocería del estudiantado en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, era un fractal de las que decían representar a los campesinos, a los obreros o a la izquierda.

Estos fueron, a brocha gorda, los precedentes del desastre múltiple que vivimos en los años ochenta. Era la muestra simple de las incapacidades del Estado nacional que a duras penas lograba atenuar los problemas en la capital de la república y de una población –especialmente la antioqueña– que nos mostró cómo se malvive en un estado de naturaleza en el que reinan la desconfianza y la competencia atroz, que conducen a la violencia, y en el que la vida fue, para los muchos, “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”. Jorge Orlando Melo, en una conferencia pronunciada el 14 de septiembre de 1994, en su rol de Consejero Presidencial, hizo su balance enumerando “las cosas

que nos han destruido casi del todo”. Vivir juntos se había vuelto insoportable; la única cuestión importante era sobrevivir y ante ese tipo de urgencias el bien suele replegarse.

A la sociedad antioqueña, que para ese momento estaba diezmada, exhausta y perpleja, el Estado central le brindó una probabilidad de cambio a través de un proceso participativo y ejecutivo –como fue la Consejería Presidencial para Medellín–, y de otro, incluyente y normativo, la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero explicar los dos calificativos que uso para esos hitos de nuestra historia reciente. Ambas iniciativas les ofrecieron a las élites antioqueñas la oportunidad de ensayar ejercicios de diálogo y debate con una academia que le era ajena hacía tiempos, con sectores sociales que desconocían y con organismos no gubernamentales que habían aparecido signados por el estigma oficial y mediático. A los sectores subalternos les permitió humanizar a una franja a la que consideraba enemiga o, en cualquier caso, con la que tenía conflictos que parecían irreductibles. A unos y a otros les mostró que no existían tales cosas como la intangibilidad de las leyes o la imposibilidad del cambio o de los acuerdos entre grupos sociales que tenían intereses divergentes y visiones del mundo distintas e, incluso, contrarias; y les enseñó a hacer las paces con guerrilleros, milicianos y paramilitares. No sobra apuntar, porque tratándose de este tema y desde el punto de vista que adopto ninguna consideración está de más, que la premisa de estos encuentros, conversaciones y acuerdos fue la ruptura perentoria con los poderes del narcotráfico.

La nueva Constitución Política le entregó a la región un catálogo normativo que abría perspectivas éticas renovadas. Ese catálogo incluyó una visión secular del mundo y de la autoridad, un sentido positivo de la libertad, una perspectiva pluricultural

de la nación, una concepción de justicia que trascendía la idea retributiva dominante y el horizonte de los derechos humanos, ajeno al discurso y las prácticas de una cultura paternalista como la nuestra.

Quiero destacar una novedad. Este ambiente propició la reflexión sobre la forma de ser de los antioqueños, las condiciones que habían permitido el desbarajuste regional y los términos necesarios para darle viabilidad a una nueva forma de vivir juntos. Después de tres cuartos de siglo, las conversaciones sobre ética volvieron a ser atractivas y frecuentes en Antioquia. De las formulaciones registradas en las memorias de algunos de los foros especializados que se realizaron en la década de 1990 destaco algunas ideas que tuvieron resonancia y que contribuyeron a perfilar el contenido de lo que debería ser un *modo de vida* acorde con el nuevo programa del país y las necesidades regionales. Empiezo por Carlos Alberto Calderón, quien vio la salida en un acuerdo ético mínimo y demandó que el respeto de la vida humana tuviera prelación; en el mismo espacio, María Teresa Uribe recalcó sobre la necesidad de la construcción de una esfera pública robusta y una ética específica de ella que le otorgara primacía a la política sobre la violencia y a la concertación sobre la imposición, y que reconociera el inherente carácter democrático de la conflictividad social abandonando cualquier pulsión de armonía; Beatriz Restrepo Gallego formuló unas exigencias que llamó de pluralidad y de transformación, y pidió una reconsideración ética de la dimensión económica; por último, Nicanor Restrepo abogó por un capitalismo que no aceptara que “pueda hacerse cualquier cosa para enriquecerse” y dijo que la participación de las empresas en los procesos de paz era indispensable.

No hay duda de que los postulados programáticos de la Constitución y los enunciados del liderazgo visible de la región

representaban un ideal regulativo para los antioqueños; una guía, “hoja de ruta” creo que fue una de las expresiones más socorridas en ese entonces. Que esos ideales tuvieran carnadura institucional, no solo pública sino también privada y académica, hacían de ella una fuerza constituyente y permitía albergar buenas expectativas sobre la conformación de un *modo de vida* que le correspondiera y le sirviera de apoyo. A la primacía de esa fuerza se deben buena parte de los logros antioqueños en las décadas recientes, pero no solo en virtud de su potencialidad sino, adicionalmente, por la sinergia afortunada con políticas nacionales, unas veces, o por las convergencias ocasionales con otros agentes sociales o por el aprovechamiento de ciertas oportunidades o, sobre todo, porque emergieron proyectos políticos locales que materializaron algunos de los proyectos esbozados cuando empezamos a hablar de alternativas de futuro.

Es más difícil evaluar la influencia en el *modo de vida* antioqueño de esta que llamo *red cívica*. De un estudio que hicimos hace diez años sobre valores, creencias y representaciones puede colegirse que una franja importante de la población antioqueña –digamos un tercio– mostró inclinaciones significativas al respeto por la ley, el aprecio de los bienes públicos, la tolerancia y la autonomía personal. En un periodo tan corto y con el punto de partida que teníamos no sería una influencia despreciable, en particular dados los grados de poder e influjo de de sus valedores, pero en asuntos culturales la estabilidad temporal del grupo que marca la pauta de comportamiento es un factor determinante. Esa estabilidad no fue duradera en Medellín y menos aún en Antioquia.

Esta *red cívica* no logró la hegemonía moral puesto que la orientación que le imprimió a la sociedad antioqueña fue disputada por

una *red predatoria* emergente. Llamo *red predatoria* a la conjunción de intereses de políticos, mafiosos y negociantes que usaron la violencia y la política como vías de acumulación de poder y riqueza, en un entorno que ofrecía mayores recursos en fuentes como las entidades públicas regionales, que acrecentaron sus presupuestos, y las economías criminales, que contaron con una bonanza del oro y dos de la cocaína. Hechos de la vida social y política que percibíamos aislados cobraron una dimensión más estructurada y clara cuando empezamos a conocer los estudios sociológicos, los trabajos de memoria y los procesos penales, tanto de la justicia ordinaria como de la transicional.



¿Cómo fue posible que una parte del alma antioqueña fuera seducida por el *modo de vida* de una asociación criminal que fue responsable de la peor violencia que sufrió su ciudad capital en toda la historia y una de las más brutales del mundo? La primera parte de la respuesta la aportó María Teresa Uribe, en 1990:

Los viejos valores antioqueños... más bien cumplen funciones de desestructuración. ¿Qué pensar entonces de las prácticas sociales de narcotraficantes y sicarios que reivindican para su quehacer las manifestaciones externas de la religión tradicional, el trabajo orientado hacia fines útiles y de enriquecimiento, el valor de la familia, el amor a la madre y la asunción del riesgo, la aventura y el arrojo?

Acá introduzco una hipótesis complementaria porque no se trató solo de una figura de remplazo. La actividad económica del narcotráfico implicó elementos disruptivos como la promoción del consumo masivo y suntuario, la competencia desaforada por el estatus, la diseminación del gusto ostentoso y extravagante, el vértigo acumulativo, la imposición de la mirada de corto plazo

y la subestimación del valor de la ley en la gestión de los contratos. Los narcotraficantes conservaron el valor demostrativo y simbólico de la religión y, además, se afiliaron tempranamente con consumos culturales, como el fútbol, la música popular y la farándula, que adquirieron una gran aceptación y que son un factor nada despreciable de legitimidad y de creación de fueros personales.

El *modo de vida* que surgió del narcotráfico tuvo, desde entonces, un fuerte atractivo y desplegó una ingente energía imitativa en todo el espectro social, aupada por las tendencias globales. El antiguo dispositivo de blanqueamiento que permitía el reconocimiento social a partir del dinero se transfiguró doblemente: por un lado, en el trámite por medio del cual los circuitos tradicionales del mercado ayudaron –con la mediación cómplice del Estado– a limpiar la riqueza acumulada a través de la fuerza y los negocios criminales; por el otro, en la jurisprudencia instalada en el imaginario colectivo de que la renuncia al terrorismo y la reducción en el uso de la violencia física eran las únicas contraprestaciones exigibles a los agentes del capital ilegal por parte de la sociedad para mantenerles abiertas las puertas.

Esta no era la “etapa fenicia” cuyo advenimiento anunció Lleras Camargo en 1959. Esa etapa llegó poco después de la mano de otros protagonistas que –a su pesar y desde una perspectiva distinta– reforzaron las pautas comportamentales del narcotráfico. Hablo de los exponentes del hipercapitalismo que se decantaron por la monetización de todas las esferas de la vida, por el prurito de maximizar la utilidad, por la celeridad en la rotación del capital, por la mitología de que toda riqueza proviene de un mero esfuerzo individual. En suma, de una doctrina opuesta al enunciado de Nicanor Restrepo de que era ilegítimo hacer cualquier cosa para enriquecerse. Creo que aquí se delinea una

disputa crucial para nuestro porvenir entre los practicantes de un capitalismo orientado al bienestar y los que propugnan por un capitalismo enfocado solo en el lucro; o, dicho en términos imprecisos pero que todos podemos entender, entre el capitalismo social y el capitalismo salvaje.

Esta convergencia en el registro económico y en algunos patrones conductuales entre los miembros fenicios de la burguesía legal-racional y los criminales ricos no es una deriva endogámica criolla, es un fenómeno extendido en América Latina y otras partes del mundo. Lo que resulta llamativo es cómo la aculturación de estos sectores los une alrededor de una versión burda de algunas fuerzas modernas: libertades no, mercado sí; equidad no, meritocracia sí; fraternidad no, enemistad sí; individualidad no, individualismo sí; democracia no, autoritarismo competitivo sí. Esta interpretación puede ayudarnos a entender cómo se producen las afinidades políticas entre segmentos sociales que tienen una imagen tan antagónica de sí mismos.

Bien sea que lo entendamos o no como una forma de autoorganización de la comunidad, lo cierto es que la solidez y la continuidad del Estado de derecho es un factor decisivo para el proceso de civilización. Es imposible garantizar que podamos vivir juntos sin que tengamos un Estado medianamente fuerte y eficaz; es muy difícil promover un *modo de vida* que refleje arreglos éticos básicos en contra de las señales que dan las instituciones estatales. Como lo saben los expertos y lo sienten los pobladores, el Estado mejoró sensiblemente sus capacidades desde 1990 y, en particular, en lo que va del siglo XXI. También se sabe y se siente que los vectores principales de esa potencia todavía no logran acomodarse ni asimilar las normas, los hábitos y los símbolos que implicaba el nuevo orden, tal y como se formuló

en 1991. En tres décadas, los colombianos hemos transitado por una montaña rusa en aspectos programáticos como las libertades, la seguridad, el bienestar, y en otros decisivos como el contenido de la legislación y el respeto a la ley; grandes porciones de la población distan de estar familiarizadas con el horizonte regulativo que nos dimos y que es consistente con el marco cultural de Occidente, aspiración casi constante de los forjadores de la república.

La peor amenaza para la esperanza de vivir juntos es el desencuentro de los sectores gobernantes respecto de la paz y sus ideas conexas, como el monopolio de la fuerza, el ejercicio de la autoridad en toda la geografía y la oferta de justicia para toda la población. Objetivos tan arduos se tornan inasibles cuando los principales agentes políticos y económicos se ofuscan y pierden todo norte y toda visión de Estado. El país se adiestró en frecuentes pactos de paz durante los años noventa y luego se entrabó en una maraña de buenas intenciones, malas prácticas e intereses protervos. La paz política de los noventa fue incompleta, pero no inútil; en este siglo, el Estado ganó la guerra pero perdió la paz por la desmesura del resentimiento y las narrativas del odio. La mezquindad con la cual media Colombia hundió los acuerdos del 2016 –vista con extrañeza por los forasteros– será contada con estupor por las generaciones venideras; o al menos eso creo y espero. Volteo la página, ¿y qué veo? Veo mucha gente que actúa como si el porvenir deseable fuera establecer unas pequeñas islas pacificadas en las cuales trabajar, comprar y reproducirse, sin importar que estén rodeadas por mares escabrosos donde los demás verán cómo llevan sus días. Esto significa, ni más ni menos, la renuncia a la idea básica que dio origen a la nación: que queríamos y deberíamos vivir juntos.

Un ejemplo de esto es la represa construida por el Estado, que domeñó nuestro río sin controlar el territorio, que armó una



muralla de hormigón sin integrar a la población, que busca extraer energía de una zona a la que no se dan muestras de querer llevarle bienestar. Ninguna autoridad quiso articular la obra de ingeniería con el plan de desarrollo territorial que salió de La Habana, ¿por qué? Porque salió de La Habana, con todos los ingredientes que se conocen y que no quiero repetir. Debo decirles a los indulgentes, quienes piensan primero en términos de los obstáculos que tienen los administradores, que Hidroituango queda a cien kilómetros de Medellín en línea recta.

Los mayores riesgos actuales para que florezca un *modo de vida* pluralista, libre y equitativo provienen del deterioro de la ejemplaridad pública y la creciente fuerza de las creencias opuestas a los valores constitucionales. La falta de ejemplaridad pública es fuente condicionante del comportamiento de los funcionarios del Estado y de los representantes ungidos por el voto popular, y desmotiva el respeto y socava la confianza de la ciudadanía en las autoridades. Detrás de este declive está la esquizofrenia de la vieja moral que solo se desvelaba por las virtudes privadas y toleraba los vicios públicos, y que se manifestó en la displicencia frente a la corrupción episódica y el descontrol de los incentivos que nos llevaron a un estadio de corrupción sistémica; lo que quizás deba sugerir cambios serios en el régimen político. El otro riesgo está ligado a las opciones, oportunistas o no, de los líderes políticos que fertilizan tradiciones anacrónicas para atormentar el presente: la incesante repulsa contra el Estado laico y los derechos individuales, la lucha desde una concepción particular de la vida buena contra el pacto constitucional, las polícromas expresiones de fanatismo que contempla la violencia como una alternativa probable, la escasez de simpatía y compasión en la esfera pública.

Hago explícitas las preguntas que subyacen a este discurso: ¿Necesitamos razones para vivir juntos? ¿Cómo podemos vivir juntos? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Es posible vivir *bien* juntos o debemos conformarnos con vivir unos al lado de los otros?

Vivir *bien* juntos entraña la hegemonía de un *modo de vida* que es ya improbable, al menos en el mediano plazo, para quienes, como a nosotros, se nos vino encima la modernidad sin haber resuelto los viejos problemas y porque la realidad contemporánea del pluralismo hace inevitable una situación agonal. Las personas e instituciones que nos sentimos afines a esa *red cívica* que se construyó en la región en las últimas tres décadas no podemos renunciar a ese *modo de vida* que hemos prefigurado. Este aprieto en el que estamos es el mismo que atraviesa la cultura occidental, porque uno de los signos del espíritu del tiempo es la defensa de los valores de la Ilustración. Estamos ante un conflicto irresoluble que no admite cansancio ni resignación. Si la libertad –valor fundamental de este programa– siempre se “orienta a lo mejor, a lo más difícil”, entonces se necesitarán convicción y valentía para esta contienda. Porque no debemos engañarnos, se trata de una contienda contracultural que, a diferencia de las condiciones de hace pocos años, se librará en condiciones desventajosas.

*Vivir juntos* es probable a pesar de que la moderación, la tolerancia, el respeto de la diferencia, y ni siquiera la cortesía que pregonaron hace un siglo Argemira Mejía y Pedro Antonio Restrepo, viven buenos tiempos. Es probable, mas no fácil. Por un lado, la tradición nacional del pactismo, celebrada por tantos historiadores y denostada por algunos radicales, está cuestionada. Por el otro, las razones originarias para vivir juntos, la tierra y el habla, se están tambaleando: basta ver la brecha que existe entre la *red cívica* y la *red predatoria* respecto de cómo entender la relación

con el suelo natal y sus implicaciones: el arraigo, el ambiente, el paisaje; basta constatar la dificultad que tenemos para verbalizar las diferencias y las pocas coincidencias que tenemos respecto de los libros que leemos o las canciones que cantamos.

Para que sea factible vivir juntos hay que abonar las arenas deliberativas, construir una esfera pública razonable y promover el hábito de hacer acuerdos puntuales, pequeños, acerca de la manera de tratarnos mutuamente y de hacer algunas cosas en común. Estamos en el lugar incómodo en el que debemos apreciar los equilibrios precarios. Ahora bien, ese camino será menos empinado si contamos con un marco institucional apropiado. A pesar de la arremetida cultural y legislativa contra la Carta Política, su columna vertebral, compuesta por los valores, los derechos y el guardián constitucional, se mantiene en pie, pero su eficacia necesita bases espirituales y materiales en acción.

Las categorías filosóficas del vivir juntos y el *modo de vida* tienen, claro está, una premisa común que enuncio desde la voz de un poeta: “Hablo de la ciudad: hablo de la ciudad inmensa, realidad hecha de dos palabras: *los otros*”. Los otros; Octavio Paz les puso cursivas a esas palabras que me traen la remembranza de uno de los pioneros de estas ideas en Medellín, que nos estaría ayudando a mejorar la conversación; hablo de León Zuleta, a quien perdimos hace veintinueve años. Colombia discurre hace años por la pendiente resbaladiza que se creó ante una sensación constante de drama existencial en el que la presión del miedo y la necesidad se les impuso a muchos a costa de la libertad y la autonomía; para una enorme porción de la población esto ha significado conformarse con una condición de mera sobrevivencia. Esa presión se ha construido sobre la idea de que existen colombianos que son enemigos eternos y absolutos con los que no podemos coexistir y, a veces, que no son seres humanos que merezcan vivir.

De nuevo, la perspectiva limitada de vivir apenas unos al lado de los otros, con distancia y respeto, sin pretensiones de cooperación o alta confianza, debería ser parte de nuestras opciones. Es una opción teóricamente modesta, pero nada desdeñable en sentido práctico.

Nuestra esperanza puede anclarse en el reconocimiento de la vida y la dignidad de *los otros* colombianos, tan distintos a nosotros; en que podamos ampliar nuestros repertorios conversacionales y realizar pequeños arreglos cotidianos entre diferentes; nuestro primer propósito común tendría que ser dejar de excluirnos mutuamente, amenazarnos y matarnos. Mientras tanto, nosotros –ese colectivo que no somos todos– estamos obligados a cultivar y ampliar la influencia de un *modo de vida* guiado por los ideales de la libertad, la igualdad y la solidaridad.

La universidad nunca ha sido objeto de mis preocupaciones pero siento la necesidad de dedicar las últimas palabras a su situación y su papel respecto a vivir juntos y vivir *bien* juntos. No de la Universidad EAFIT en particular, sino de la institución colombiana y antioqueña. Lapidariamente, diré que la universidad debe ser una caverna de transformadores. Mis afinidades filosóficas se decantaron hacia todos aquellos pensadores que sostienen que no solo no podemos, sino que no debemos salir de la caverna. No hay ríos de leche y miel allá afuera, ni verdades por descubrir, no hay utopías ni sistemas acabados; lo que requerimos es crear una cultura abierta a la crítica, la falibilidad y la discusión, al pluralismo y la cooperación, al conflicto y a los acuerdos transitorios para vivir juntos en un mundo imperfecto, incierto y lleno de fricciones para el designio humano. Si la universidad no contribuye a la transformación social se vuelve superflua; esta afirmación que puede parecer trivial va en contravía del genoma

conservador de la educación. No puedo decir qué tan adecuada o fecunda sea la labor que hemos hecho en las universidades, lo que sí creo es que las reglas que se nos han impuesto la obstruyen. Las condiciones y los trámites para la creación, la investigación y la publicación limitan la libertad académica e impiden la participación oportuna en el debate público y la formación de la opinión, y los frutos del trabajo terminan siendo solo historia social. El insoportable control estatal sobre las universidades y la servidumbre voluntaria respecto a las métricas privadas internacionales crearon un reflejo que puso a la academia al servicio de la administración. También aquí se necesita más rebeldía para crear y preservar espacios autónomos.

*Jorge Giraldo Ramírez*  
31 de mayo de 2022



SE TERMINÓ DE IMPRIMIR  
EN AGOSTO DE 2022, TERCER AÑO DE LA PESTE  
EN TRANSPARENCIA DÚO  
PARA LA EDITORIAL EAFIT